



La Diputación reclama al Gobierno más policías y guardias civiles por el «aumento de la criminalidad»

El portavoz del PP, Jesús García Galván, recuerda que el número de delitos ha crecido el 25% en los últimos 4 años

DAVID SAN JOSÉ VALLADOLID

El pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad una proposición defendida por Jesús García Galván, portavoz del PP, para reclamar un incremento de las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado en la provincia de Valladolid, «ya que muchos de nuestros vecinos dicen no sentirse seguros ni en sus propios domicilios». García Galván recordó que el número de delitos en la provincia ha pasado de los 5.877 del año 2004 a los 7.383 del 2008, lo que supone un aumento de la criminalidad del 25,62%. Esta «escasez de medios humanos y materiales» hace que, para el PP, algunos delitos «queden impunes».

La portavoz del PSOE, Ana Vázquez Vegas, explicó que este incremento se ha producido por-

que «han cambiado» varias leyes, como las de tráfico y violencia doméstica. «No ha aumentado la criminalidad, sino que hay una mayor eficacia de la Policía. Hay varios planes de actuación que antes no existían», explicó Vázquez.

Recordó además que, en el 2004, el número de agentes en la provincia era de 39.000, cuando ahora se ha aumentado a 44.000.

García Galván respondió que «la principal causa del aumento de la delincuencia es la proliferación de bandas organizadas en los últimos años, que en su mayoría proceden de los países del Este de Europa y de Hispanoamérica». Añadió que estas cifras «las han planteado los sindicatos de los cuerpos de seguridad del Estado. No me las invento yo», sentenció García Galván.

Además, se insta a los ayunta-

mientos de Laguna de Duero y Medina del Campo a «agilizar los trámites con el Ministerio de Interior» para rehabilitar y construir, respectivamente, los nuevos cuarteles de la Guardia Civil.

Escuelas infantiles

El pleno de la Diputación votó en contra (con la mayoría del PP) de la propuesta del PSOE en la que se instaba a la Diputación a rechazar el proceso de transferencias de competencias en materia de escuelas de educación infantil a los ayuntamientos. Según María Jesús Lobo, diputada socialista, «este tipo de transferencias pondrían en peligro un modelo educativo de calidad, no discriminatorio, inclusivo, universal y público, viéndose abocados estos centros a una casi segura gestión privada». Ante esta proposición, García Galván aclaró que «se trata de una petición voluntaria. No va a haber traslado de competencias si el respectivo ayuntamiento no quiere. La Junta de Castilla y León garantiza que va a seguir habiendo centros públicos».